

46ª REUNION — 15ª SESION DE PRORROGA — NOVIEMBRE 23 DE 1973

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º del Honorable Senado; del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA, vicepresidente 2º del Honorable Senado, y del doctor ALBERTO M. FONROUGE, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Secretarios: señor ALDO HERMES CANTONI y escribana pública IRMA S. DE CESARETTI

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio
AVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BENI, Juan Carlos E.
BLANCO, Rodolfo E.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Hugo Genaro
CAMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CARO, J. Armando
CERRO, Francisco Eduardo
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DE LA RUA, Fernando
DÍAZ BIALET, Alejandro
ELÍAS, Florencio
ESPERANZA, Joaquín Heracleo
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FRANCO, Carlos A.
FROIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCÍA, Américo Alberto
GARCÍA, Justino
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, José Jorge
JAUREGUI, Rafael Zenón
LORENZO, Jorge Luis
LORENZO, Ramón
LUDER, Italo A.
LUNA, Pedro Antonio
MANCINI, Omar A.

MARTINEZ, Julio César
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MURGUIA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio Oscar
PAZ, Eduardo Alberto
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
RODRIGUEZ, Ginés Froilán
ROMERO, Humberto Antonio
SAADI, Vicente Leónides
SALAS CORREA, Luis I.
SALMOIRAGHI, José César
SAPAG, Elías
VAL, Buenaventura Justo
VALLE de GONZALEZ, Leni Rosa
VIVAS, Angel Juan Gregorio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON AVISO:

CACERES, Rubén Osvaldo
CARNEVALE, Luis
CHAILE, Juan Carlos
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario
MARTIARENA, José H.
MAYA, Héctor Domingo
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

AUSENTES, CON LICENCIA:

ANGELOZ, Eduardo César
HERRERA, Dermidio Fernando L.
MUNIAGURRIA, Camilo

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación de la Universidad Nacional de Jujuy. (Página 2411.)
 - II.—Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 2412.)
 - III.—Comunicaciones oficiales. (Página 2412.)
 - IV.—Comunicación de comisión. (Página 2413.)
 - V.—Dictámenes de comisiones. (Página 2413.)
 - VI.—Proyecto de ley del señor senador Zarriello por el que se otorga un subsidio a la Asociación Vecinal Villa General Mitre y Biblioteca Popular Ciencia y Labor, de la Capital Federal. (Página 2413.)
 - VII.—Proyecto de ley del señor senador Caro sobre expropiaciones a empresas privadas de telecomunicaciones. (Página 2414.)
 - VIII.—Proyecto de ley del señor senador Britos por el que se crea la Comisión Nacional de Discapacitados. (Página 2414.)
 - IX.—Proyecto de ley del señor senador Perette y otros señores senadores por el que se modifica la ley 20.321, régimen orgánico de mutualidades. (Página 2416.)
 - X.—Proyecto de ley del señor senador Zarriello y otros señores senadores sobre creación de la Empresa Nacional Yacimientos Mineros Fiscales. (Página 2417.)
 - XI.—Proyecto de ley del señor senador Lorenzo (J. L.) sobre donación de un solar al Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz. (Página 2421.)
 - XII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Evans y Cámpora sobre desgravaciones impositivas aplicadas a la vitivinicultura. (Página 2422.)
- 2.—A moción del señor senador Luder se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el dictamen de la Comisión de Educación en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación de la Universidad Nacional de Jujuy. (Página 2423.)
 - 3.—A moción del señor senador Moreno se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores Allende y Cantóni sobre construcción de un edificio para la Casa del Maestro en la ciudad de San Juan. (Página 2431.)
 - 4.—Pedidos de pronto despacho de los señores senadores Britos, Perette y Lorenzo (J. L.) para los asuntos que figuran en los puntos VIII, IX y XI, respectivamente, de los asuntos entrados. (Página 2434.)

- 5.—Consideración del dictamen de la Comisión de Economía en el proyecto de resolución del señor senador Cornejo Linares sobre creación de una comisión especial encargada de recopilar proyectos relativos a la promoción económica del Noroeste del país. Se aprueba. (Página 2436.)
- 6.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre autorización para aceptar el cargo de cónsul honorario por el ciudadano Enrique Thompson. Se aprueba. (Página 2441.)
- 7.—Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre autorización para aceptar condecoraciones solicitada por varios ciudadanos argentinos. Se aprueba. (Página 2442.)
- 8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de ley del señor senador Caro sobre modificación del artículo 4º de la ley 4.408 y del artículo 3º de la ley 19.798. Se aprueba. (Página 2444.)
- 9.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se transfiere un inmueble a la Unión del Personal Civil de la Nación. Se aprueba. (Página 2449.)
- 10.—Consideración del dictamen de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre venta de tierras del Estado a la Cooperativa de Viviendas Rieles Argentina Mendoza Limitada. Se aprueba. (Página 2451.)
- 11.—Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de ley del señor senador Britos por el que se transfiere un terreno de Ferrocarriles Argentinos al Club General San Martín, de Villa Mercedes, San Luis. Se aprueba. (Página 2452.)
- 12.—A moción del señor senador Luder se considera y aprueba el dictamen de las comisiones de Industria y Minería y de Economía en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley sobre Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. (Página 2453.)
- 13.—Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de comunicación de los señores senadores Romero y Peroni sobre habilitación del servicio telefónico en localidades de Corrientes. Se aprueba. (Página 2458.)
- 14.—Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de comunicación del señor senador Salmoiraghi para que se considere, en forma prioritaria, la instalación del servicio de teledisco en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca. Se aprueba. (Página 2459.)

VII

Expropiaciones a empresas privadas de telecomunicaciones. — Proyecto de ley del señor senador Caro

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — A partir de la sanción de la presente ley, el servicio público de telecomunicaciones que tenga por objeto unir una provincia con otra u otras, o éstas con la Capital Federal, será prestado exclusivamente por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).

Art. 2º — Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, declaranse de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes, medios, sistemas, dispositivos e instalaciones de las empresas privadas que actualmente prestan servicios de telecomunicaciones en el país.

No será necesario aplicar el procedimiento de la expropiación cuando la Empresa Nacional de Telecomunicaciones pueda concertar convenios privados, de uso o de arrendamiento, con las empresas privadas concesionarias de los servicios provinciales, que contemplen el interés nacional.

Art. 3º — La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) entrará en posesión inmediata de los bienes que se expropien, previo depósito judicial del cincuenta por ciento del valor del último inventario de los mismos.

El Poder Ejecutivo pagará al titular de los bienes expropiados el valor que corresponda de conformidad con las disposiciones de los artículos 17, 11 y 16 de la ley nacional de expropiaciones, 13.264.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José Armando Caro.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto de ley que someto a la consideración de vuestra honorabilidad se inspira en la necesidad de alcanzar un mayor nivel de eficacia en las comunicaciones telefónicas dentro del país y en las que, principalmente, se necesitan obtener desde las provincias con la Capital Federal.

Es aconsejable que estos servicios sean nacionalizados en cabeza de una empresa estatal que, a través de todos los años de su actuación, ha demostrado eficacia, y el mejoramiento técnico de sus instalaciones y servicios.

Es absurdo, por ejemplo, que desde una provincia argentina, para obtener una comunicación telefónica con la Capital Federal, deba soportarse no menos de ocho horas de espera. En las provincias del interior actúan compañías privadas concesionarias de los servicios telefónicos. En ninguna de ellas se ha logrado un nivel de mejoramiento técnico que pueda invocarse como beneficio para un servicio mejor en beneficio del usuario. El servicio que esas empresas prestan es malo, tremendamente lento y, además, muy caro. Contra estas y otras dificultades no prospera ninguna reclamación originada en los inconvenientes que destaca, por más justificadas que sean.

Si ENTel tomara a su cargo el servicio telefónico en todo el país, como lo prevé el proyecto de ley que he presentado, el mejoramiento de tales servicios resultará notorio.

El proyecto autoriza a ENTel para la expropiación de los bienes, medios, instalaciones, dispositivos y demás efectos de propiedad de las empresas privadas concesionarias de los servicios provinciales, sin perjuicio de que, si mediare la concertación de convenios y contratos con esas compañías, bajo la supervisión y control de ENTel y los servicios resultaren susceptibles de mejoramientos de tipo técnico y funcional, y con ellos se asegure a los usuarios un servicio mejor, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones acepte este temperamento.

En los casos en que resultare necesario el procedimiento de la expropiación que la ley autoriza, se dispone la toma inmediata de la posesión de los bienes e instalaciones mediante el depósito judicial previo del 50 % del valor de los bienes del último inventario, y luego se continuarán los procedimientos establecidos por la ley 13.264 (ley nacional de expropiaciones).

El procedimiento expropiatorio se justifica frente a la necesidad de satisfacer debidamente y con la rapidez que las comunicaciones en la vida moderna deben cumplir. Las comunicaciones, en todas sus formas, y principalmente las telefónicas, son de indiscutible utilidad pública y social.

El derecho patrimonial de las empresas que resultaren expropiadas se encuentra garantizado por las disposiciones de la ley 13.264 que contempla a los mismos.

Es asunto indiscutido del derecho administrativo que la autoridad nacional, en los casos de expropiaciones, puede determinar el precio de los bienes que hubieran sido declarados de utilidad pública, en decisión fundada y motivada, y que si el expropiado no acepta el precio, la autoridad puede disponer de los bienes requeridos y consignar judicialmente el mismo. El propio Código Civil, baluarte de los derechos patrimoniales, establece el principio que adopta el proyecto en consideración, en el artículo 2.512, si bien fundado en la necesidad y no en la mera utilidad pública (1).

La doctrina y la legislación vigente en materia de expropiaciones asegura que las que esta ley faculta a efectuar no han de constituir de ningún modo un acto arbitrario de gobierno, que pudiera provocar perjuicios patrimoniales a los expropiados; y, en cambio, significará un acto de gobierno necesario para llevar a la población del país un servicio de tan indispensable uso en la vida moderna.

J. Armando Caro.

—A las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales.

VIII

Comisión Nacional de Discapitados. — Proyecto de ley del señor senador Britos

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase con carácter de entidad descentralizada, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Comisión Nacional de Discapitados. La comisión nacional deberá constituirse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la presente ley, dentro del plazo de ciento ochenta días, a contar desde su promulgación.

(1) Bielsa: *Derecho administrativo*, tomo IV, página 528.

Art. 2º — Son funciones de la Comisión Nacional de Discapacitados:

- a) Controlar, como función primordial y específica, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;
- b) Oponerse, mediante resoluciones fundadas, a cualquier medida oficial o privada que pudiera atentar contra la salud de los discapacitados, o que resultare perjudicial a sus intereses;
- c) Proponer a los empleadores las condiciones de trabajo acordes con las aptitudes de los discapacitados, y vigilar el cumplimiento a su respecto de las disposiciones que protegen la higiene y salud de los trabajadores protegidos por la presente ley;
- d) Aplicar las sanciones que la comisión nacional estableciere en caso de infracción, desconocimiento o desobediencia a las prescripciones de esta ley.

Art. 3º — La comisión nacional controlará el cumplimiento de la presente ley, a cuyo efecto exigirá:

- a) La confección de un registro de empleadores;
- b) La presentación, al 31 de octubre de cada año, de una declaración jurada, en la que se denunciará el número total de trabajadores de que dispone el empleador, detallando separadamente el número de discapacitados, de entre ellos, si los hubiera;
- c) En caso de incumplimiento del porcentaje que establece esta ley, la comisión fijará un plazo perentorio de 30 días para su enmienda, bajo apercibimiento de aplicación de una multa cuyo monto determinará la comisión nacional en cada caso.

Art. 4º — La Comisión Nacional de Discapacitados, bajo la presidencia del representante del Servicio Nacional de Empleo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, estará integrada por los siguientes miembros:

- a) Un representante de la CGT;
- b) Un médico psiquiatra designado por el Instituto Nacional de la Salud Mental;
- c) Un médico designado por la Subsecretaría de Salud Pública de la Nación;
- d) Un psicólogo designado por la Subsecretaría de Salud Pública de la Nación;
- e) Un representante de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad del Ministerio de Bienestar Social;
- f) Cuatro representantes de los discapacitados, que acrediten experiencia laboral anterior.

Art. 5º — Se entiende por discapacitados a todos aquellos que por razones de accidentes de trabajo, enfermedad congénita o adquirida —inclusive enfermedad profesional— poseen una capacidad distinta, física o psíquica, permanente, periódica o transitoria.

Art. 6º — Todo organismo o repartición de la administración nacional y toda empresa estatal, privada o mixta quedan obligados en la ocupación de mano de obra a destinar un cuatro por ciento del total de plazas de trabajo existentes, al empleo de discapacitados, cuando éstos reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. El porcentaje establecido por este artículo deberá mantenerse en forma constante, sea por causa de vacantes o de incremento de la dotación del personal.

Art. 7º — Todo discapacitado presentará con su solicitud de empleo un certificado médico que acre-

dite su discapacidad, para lograr los beneficios que nacen de la presente ley.

Art. 8º — Los empleadores deben obtener la autorización de la Comisión Nacional de Discapacitados, antes de adoptar cualquier resolución respecto de los discapacitados a quienes correspondiere la aplicación de las leyes laborales.

Art. 9º — La Comisión Nacional para Discapacitados verificará en todos los centros de capacitación laboral, centros de rehabilitación y/o talleres protegidos, se otorgue preferencia en la elección de personal, a la designación de discapacitados.

Art. 10. — A partir de la promulgación de la presente ley y durante 180 días a contar desde ella, tendrán validez los certificados médicos expedidos por institutos, centros y/o fundaciones estatales y privadas, con personería jurídica, de cada sector de discapacitados. Transcurrido ese lapso la comisión se encargará del otorgamiento de los certificados médicos, por intermedio de una sección que se habilitará al efecto, integrada por profesionales, en la que podrán colaborar discapacitados con experiencia laboral. Solamente los certificados médicos expedidos por la sección a que se refiere este artículo tendrán validez legal para acreditar «situaciones médico-laborales de los discapacitados».

Art. 11. — El empleador estará obligado a proveer los medios necesarios a fin de facilitar el acceso a los lugares de trabajo y la movilidad necesaria para los discapacitados, dentro del establecimiento adonde deben cumplir sus tareas.

Art. 12. — Hasta que la Comisión Nacional de Discapacitados quede constituida, el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión estará a cargo del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Art. 13. — Los discapacitados quedan comprendidos en todos los beneficios y obligaciones que estatuyen las leyes laborales vigentes.

Art. 14. — La Comisión Nacional de Discapacitados dispondrá para el cumplimiento de sus fines:

- a) Del aporte del gobierno nacional;
- b) De los aportes de los gobiernos de provincia;
- c) Del importe de donaciones de instituciones públicas, privadas, o de particulares;
- d) Del importe de las multas que la comisión podrá aplicar, de conformidad con lo que establece el artículo 3º in fine.

Art. 15. — Deróganse todas las disposiciones que se opongan al cumplimiento de la presente ley.

Art. 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Oraldo Norvel Britos.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Este proyecto de ley, con finalidad humanitaria y social, contempla el mejoramiento de la admisibilidad de los discapacitados en las tareas que su diversa idoneidad les permite, lo cual constituye una posibilidad de reintegro o reincorporación a la sociedad.

La ley especifica el concepto actual del discapacitado como todos aquellos que poseen una capacidad distinta, física o psíquica, permanente o transitoria, para desempeñarse en una determinada actividad.

Es ampliamente conocida la aptitud especial que posee una persona que sufre algún tipo de discapacidad para soportar la misma y desarrollar otro tipo de aptitudes a un nivel muy superior al normal. Con este proyecto se persigue el reconocimiento de dicha

capacidad y se le da al afectado nuevas posibilidades de servir al grupo social.

El proyecto soluciona también el problema que, desde la promulgación de la ley de accidentes del trabajo, ha soportado el trabajador argentino, permitiéndole el reconocimiento de una indemnización por cualquier accidente o enfermedad profesional que sobrevenga en su vida laboral, beneficio que alcanza aun a los accidentes ocurridos en el trayecto al trabajo.

El porcentaje del 4 % que establece la ley en su artículo 6º surge de compatibilizar el número aproximado de discapacitados, basado en datos estadísticos suministrados por las instituciones que los agrupan. Se ha considerado útil la información suministrada por estas instituciones, debido a la carencia total de censos oficiales referidos a este sector de la población.

Si bien el porcentaje de referencia no constituye un porcentaje ideal, consideramos que en esta primera etapa la sociedad puede absorber la cantidad de personas que representan este porcentaje, que seguramente será aumentado en la medida en que el proceso de reconstrucción y liberación nacional se vaya ejecutando.

También ha considerado necesario establecerse en el proyecto la reglamentación de un certificado médico expedido por el organismo correspondiente, adonde tienen cabida los representantes de los discapacitados que tengan experiencia laboral, con el objeto de que ellos, juntamente con los médicos, estudien cada caso concreto que se presente y valoren al discapacitado, no solamente desde el punto de vista clínico, sino con el criterio de quien ya ha afrontado los inconvenientes y beneficios producidos por su incorporación al proceso de producción nacional.

La exigencia de la renovación anual del certificado está inspirada en el propósito de proteger la salud del discapacitado.

La creación de la Comisión Nacional de Discapacitados, con carácter de organismo descentralizado, con patrimonio propio, vendrá a llenar una sentida necesidad, por sus atribuciones de control de las finalidades de la ley, y por la importancia de su constitución, en la que estarán representados los principales sectores vinculados al problema de los discapacitados.

Se ha considerado indispensable establecer un sistema de multas, cuya aplicación y monto queda como atribución propia de la Comisión Nacional. En esta forma de sanción la ley espera que los empresarios y las entidades que deberán someterse a las disposiciones de ella no eludan sus obligaciones.

La comisión vendrá también a suplir casos especiales, que aunque están contemplados por las leyes laborales, al atribuir a la Comisión Nacional facultades para intervenir en todas las cuestiones en que se trate de las aptitudes de un discapacitado, asegura a éstos una mayor protección.

Oraldo Norvel Britos.

Sr. Britos. — Solicito que se reserve en Secretaría.

—Asentimiento.

IX

Modificación de la ley 20.321 (régimen orgánico de mutualidades). — Proyecto de ley del señor senador Perette y otros señores senadores

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Se modifica la llamada ley 20.321 incluyendo dentro de su texto los siguientes artículos,

que se insertarán en orden sucesivo a los que la constituyen:

Artículo 43. — Las disposiciones de los artículos 21, 22 y 23 de esta llamada ley no serán de cumplimiento obligatorio para las asociaciones mutuales cuyo número de asociados sea superior a veinte mil.

Artículo 44. — Las asociaciones a que se refiere el artículo precedente podrán estatuir la existencia de delegados de socios, proporcional en su número al de los afiliados que representarán, los que deberán ser elegidos por el voto secreto y directo de los asociados, ya sea en forma personal o por correo, con las demás formalidades y recaudos establecidos en el artículo 23, excepto el porcentaje del apoyo mínimo de socios a los candidatos, que se reduce al 1 %.

Artículo 45. — El término del mandato de los delegados de socios no podrá exceder de cuatro años, siéndoles aplicables las disposiciones del artículo 14.

Artículo 46. — Los delegados de socios participarán en las asambleas personalmente, y con un solo voto cada uno de ellos. No es admisible el voto por poder. Son aplicables las disposiciones de los artículos 21 y 22 con la substitución de los términos «socios» y «asociados», por «delegados de socios».

Artículo 47. — Las asociaciones mutuales a que se refiere el artículo 43, que opten estatutariamente por el régimen del artículo 44, elegirán sus autoridades en asamblea constituida por los delegados de socios que, al efecto, deberá ser convocada con anterioridad no menor de treinta días, debiendo resguardarse los principios de publicidad, amplia participación de los asambleístas y seguridad jurídica, adoptándose, en cuanto resulten conciliables con el régimen aludido, los principios del artículo 23. Para estas asociaciones rige lo dispuesto en el artículo 25, con la substitución de la palabra «asociados», por «delegado de socios».

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Carlos H. Perette. — Jorge Luis Lorenzo.
— Raúl Jorge Zarriello. — Rubén Osvaldo Cáceres. — Fernando de la Rúa.
— Julio César Martínez. — Luis A. León.*

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Al dictarse la llamada ley 20.321, que rige el desenvolvimiento del mutualismo argentino, se acordaron disposiciones que, si bien persiguen resguardar el rol societario, en la práctica crean dificultades insalvables.

Por ejemplo, el artículo 21 estatuye la intervención personal de los asociados en las asambleas de las asociaciones mutuales.

Es del caso señalar que la mayoría de las mutuales del país, con trayectorias que exceden el centenar de años para algunas, tienen miles de asociados, ya que el mutualismo se basa en la reunión de pequeños aportes mensuales para el sostenimiento de servicios sociales a los asociados, quienes, por su sola cuenta, no estarían en condiciones de sufragarlos individualmente. La ley de los grandes números, así aplicada, crea un verdadero seguro de salud del cual se benefician millones de argentinos.